

## MEDIO AMBIENTE, INTERESES NACIONALES Y COMPROMISOS GLOBALES. LOS RETOS DE LA CUMBRE DE RÍO DE JANEIRO

*Basilio Verduzco Chávez*

### *LA INEVITABLE NECESIDAD DE COOPERAR*

Los jefes de gobierno de la mayoría de los países del mundo que se reunieron el mes de junio en Río de Janeiro enfrentaron en uno de los retos diplomáticos de mayor relevancia en la historia de la humanidad: establecer compromisos internacionales que conduzcan a una reducción efectiva en las tendencias universales hacia la destrucción del medio ambiente y la diversidad ecológica sin cancelar las posibilidades de crecimiento económico y las esperanzas de mejorar el nivel de vida, sobre todo en los países menos desarrollados.

Veinte años después de haber celebrado una conferencia similar en Estocolmo que acapara la atención mundial, la atención sobre este asunto, los esfuerzos por dar a conocer las consecuencias que tiene el crecimiento sobre los recursos naturales y los ecosistemas del planeta se han multiplicado. El conflicto económico-ecológico ha pasado a formar parte de la mayoría de las agendas de los gobiernos nacionales y de organizaciones internacionales. Desafortunadamente, son pocas las soluciones que se han puesto en práctica a nivel internacional para revertir de manera efectiva varias de las tendencias al deterioro ambiental.

El Banco Mundial, por ejemplo, ha tratado de adoptar una estrategia ambientalista que comprende tres dimensiones: la relación entre degradación ambiental y pobreza; los efectos que tendrán para las futuras generaciones los patrones actuales del uso de los recursos y la interdependencia de los problemas ambientales a escala internacional.

A pesar de lo anterior, los compromisos que hasta ahora se han establecido en la mayoría de los países, se han enfocado a remediar algunas de las manifestaciones más severas. Sin embargo, no se ha tratado de

resolver las causas estructurales del conflicto ni a nivel doméstico, ni a nivel internacional. En el primer caso, sería necesario revisar el modelo de desarrollo seguido por cada país; mientras que en el segundo, deberían replantearse las condiciones de intercambio entre los países pobres y los ricos. Mientras tanto, la degradación de los recursos naturales amenaza convertirse en un problema de seguridad en escala global. Cerca de 100 especies se extinguen cada día, además se calcula que las concentraciones de fluorocarbonos crecen a un ritmo de 5 por ciento cada año, lo que contribuye a la eliminación de la capa de ozono.

Hasta ahora, los problemas ambientales no son todavía una amenaza contra la legitimidad de los gobiernos centrales de ningún país y, por lo tanto, han recibido relativamente poca atención. No obstante, proteger el medio ambiente no se ha reconocido como una función sustantiva de ningún Estado moderno, lo que sí sucede con otras tareas como la promoción del crecimiento económico, la dotación de infraestructura y servicios públicos o la protección de la soberanía nacional, tanto en el sentido militar como económico.

Debido a lo anterior, organismos internacionales como el Banco Mundial o la Organización de las Naciones Unidas han promovido la creación de sistemas cooperativos para la formulación de proyectos en materia de procesos productivos y de consumo de energía entre otros, así como esquemas de financiamiento. Por ejemplo, durante 1991 el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo logró acumular, en diversos fondos y con aportaciones de varios países, 1,300 millones de dólares para apoyar proyectos de protección ambiental.

La falta de un compromiso serio para adoptar una política ambientalista genera una gran contradicción, que se agudiza a medida que la conciencia sobre los problemas ambientales se incrementa. Por un lado,

crecen las presiones para adoptar soluciones, pero por otro, éstas son a menudo rechazadas porque tienden a concentrar sus costos en un espacio determinado y provocan la oposición de quienes salen más afectados.

Un rasgo distintivo de la política ambientalista de los países más desarrollados es la conversión de los problemas ecológicos en problemas técnicos que el Estado debe resolver, a menudo mediante acciones cuyos costos y beneficios son desigualmente distribuidos en el espacio. Esto es, por ejemplo, la creación de parques nacionales, el establecimiento de zonas restringidas para ciertas emisiones de contaminantes o la localización de instalaciones peligrosas o consideradas como negativas para los vecindarios, las comunidades o las regiones donde se proyecta su localización. Este tipo de intervención ha generado la oposición ciudadana, que cuestiona válidamente los principios de equidad sobre los que se toman las decisiones, pero que no cuestiona mucho los orígenes de un problema que sigue creciendo.

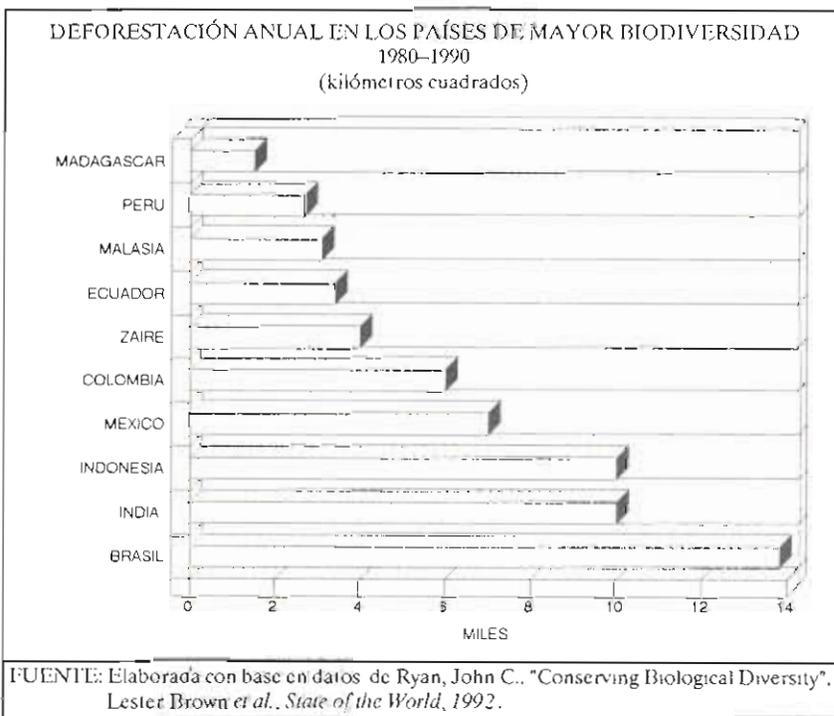
Históricamente este tipo de oposición se ha caracterizado por esgrimir argumentos parroquialistas en los que se critica, no la naturaleza de la decisión, sino su localización. Así, por ejemplo, en Estados Unidos hay una amplia literatura que documenta cómo los proyectos no deseados en el patio trasero de la casa (NIMBY por sus siglas en inglés) han tenido consecuencias en el plano político a nivel local. De esta manera, frecuentemente la intervención estatal ha creado las condiciones para que no se pueda tomar una decisión; por un lado, no se resuelven las causas que generan los problemas y, por otro, no se puede implementar la solución técnica propuesta. La oposición de grupos comunitarios y ambientalistas ha logrado hacer que se pospongan varios proyectos a pesar de los esfuerzos de gobiernos locales, o de presiones o apoyos del gobierno federal para encontrar "soluciones" localizadas en algún sitio.

Dada esta experiencia, no es aventurado pensar que un enfoque similar puede ser introducido en una política internacio-

nal sobre medio ambiente. En las condiciones actuales de la geopolítica mundial y los procesos de integración económica e interdependencia que existen, cabe preguntarse cuál sería la motivación de los distintos países para asumir un compromiso internacional para proteger el medio ambiente. En principio la respuesta parece sencilla. La globalización de los problemas ambientales como la eliminación de la capa de ozono el efecto invernadero, así como los problemas de contaminación derivados de los patrones de consumo de la humanidad o de incidentes como los derrames petroleros o la tragedia nuclear de Chernobyl en la ex-Unión Soviética, es en sí misma, un motivo para despertar el interés por cooperar. Sin embargo, el problema radica en la definición de las responsabilidades sobre los orígenes del desastre ambiental al que se ha llegado, de qué manera cada país ha de contribuir para revertir la tendencia al deterioro y cuáles son las prioridades para una agenda de trabajo internacional.

### EL PROBLEMA DIPLOMÁTICO

En este contexto, es posible decir que la ONU, al patrocinar la conferencia de Río de Janeiro sobre Medio Ambiente y Desarrollo, inaugura una nueva etapa en la historia diplomática mundial que se



caracterizará por los regateos entre países para establecer políticas internacionales en materia de protección ambiental. El hecho de que se reconozca que el origen de los problemas ambientales globales tiene múltiples causas, no significa que los países estén dispuestos a reconocer su respectiva responsabilidad. Un ejemplo de esto lo constituyen las visiones encontradas de países del norte y países del sur, que se puede esquematizar como un conflicto entre sobrepoblación y sobreconsumo de energía, elementos que se toman como explicativos del deterioro ecológico.

Para los países del norte una de las grandes amenazas sería el crecimiento demográfico acelerado de los países menos desarrollados, en donde, además, existe un rápido proceso de deforestación de la selva tropical que afecta la capa de ozono y contribuye al sobrecalentamiento del planeta y la desaparición de especies. Las cifras en este sentido muestran que el problema es en efecto muy serio. Se calcula que cada año desaparecen más de 60 mil kilómetros cuadrados de bosque sólo en los doce países con mayor biodiversidad en el planeta.

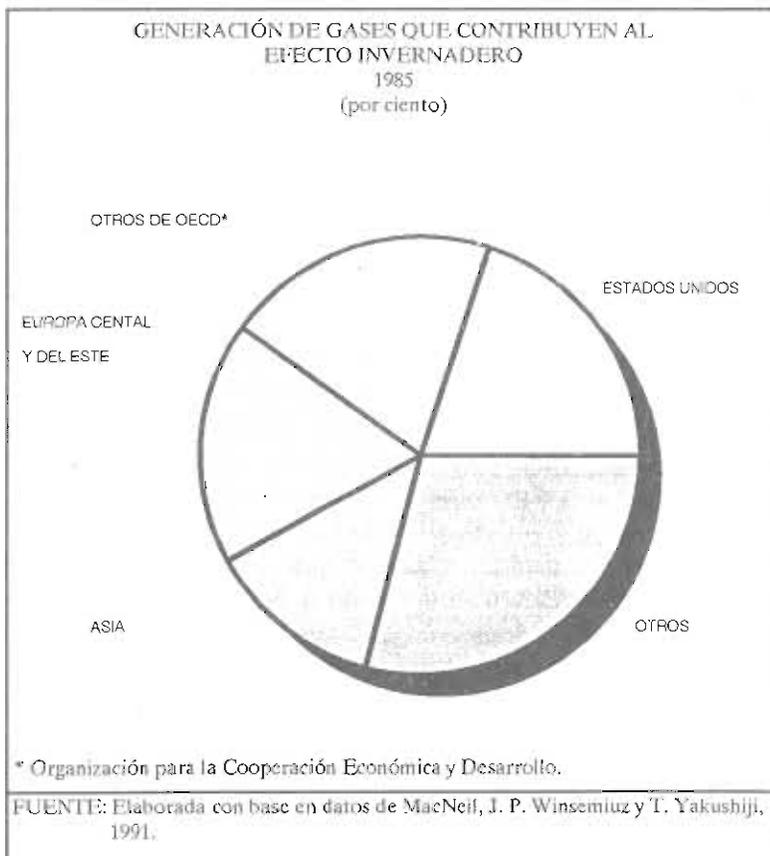
Por su parte, los países del sur alegan que gran parte del problema se debe a que los países ricos mantienen niveles de consumo de energía muy por encima de los promedios internacionales. Entre Estados Unidos y los demás países pertenecientes a la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OECD) generan el 40 por ciento de los gases que producen el efecto invernadero. Por lo tanto, argumentan los países del tercer mundo, son las naciones industrializadas las que deben comprometer una mayor cantidad de recursos tecnológicos y financieros a la protección del medio ambiente.

En estas condiciones, algunos analistas han propuesto que la cooperación Norte-Sur debe basarse en la sombra ambiental que las economías de los países desarrollados mantienen sobre los menos desarrollados. Es decir, en la que se reconozca la interdependencia económica y ecológica a nivel internacional.

En este complejo escenario se puede observar que proponer soluciones al conflicto entre desarrollo económico y la protección ambiental es más difícil aún porque los problemas ambientales no sólo no entran en el sistema internacional de mercado ni se resuelven mediante un sistema de precios, también en el "mercado político" internacional son difíciles de introducir.

Para dar soluciones efectivas no es suficiente la intervención gubernamental a nivel nacional, sino que hace falta un compromiso internacional para asegurar que no existan países que se beneficien de un sistema mundial de protección ambiental sin realizar ningún esfuerzo.

La Conferencia Internacional de Río de Janeiro se llevó a cabo en un momento muy oportuno. Al terminar el enfrentamiento Este-Oeste, los problemas ambientales pasan a ocupar el principal potencial de conflicto internacional de proporciones mundiales. No obstante, el éxito de la conferencia no está garantizado, la puesta en práctica de los acuerdos deberá pasar por un complejo proceso de negociación en el cual es necesario discutir problemas de justicia y equidad internacional y en el que se deberán poner en una balanza los objetivos de



política económica de cada país con los intereses internacionales de protección ambiental.

Si bien es cierto que la interdependencia que se ha logrado a nivel mundial es un factor que estimula el interés por establecer acuerdos internacionales en diversos campos, no es posible extrapolar esta tendencia a la solución de problemas ambientales. En este campo, el antagonismo entre intereses nacionales y la disposición a la cooperación internacional es más evidente, en especial dadas las condiciones de desigualdad existentes entre los distintos países. A la brecha entre niveles de desarrollo corresponde una marcada diferencia entre los asuntos prioritarios en materia de medio ambiente para países desarrollados y para los países pobres.

Por ello, es posible afirmar que el gran reto para la ONU en esta conferencia, más que lograr acuerdos definitivos sobre problemas concretos, fue proponer los mecanismos y establecer reglas para la solución de los conflictos internacionales relacionados con los problemas ambientales.

Esto significó un amplio debate político que necesariamente incluyó un análisis de la distribución internacional de los costos y beneficios que el desarrollo industrial ha producido, así como la desigual distribución de la riqueza. La tarea involucró, además, una discusión sobre desarrollo científico y tecnológico para evaluar las consecuencias de corto y largo plazo del crecimiento económico y la transferencia de ciertas tecnologías entre países; o para analizar la relación entre patrones de consumo y deterioro ambiental, las posibilidades de cambio tecnológico, la introducción de nuevos procesos productivos, las consecuencias de procesos de urbanización y la distribución de la población en el planeta. La posibilidad de que se imponga una especie de hegemonía ecológica no está del todo descartada.



## IMPLICACIONES PARA EL TERCER MUNDO

Parte de la amenaza de hegemonía ecológica se justifica porque en los países más desarrollados hay una mayor concientización sobre los problemas ambientales y existen movimientos ambientalistas más activos que de alguna manera presionan a los gobiernos de sus países para que adopten una agenda sobre medio ambiente más rigurosa que en los países menos desarrollados. Llevadas a la arena internacional, estas presiones pueden seguir tres caminos: primero que los gobiernos de los países más industrializados transfieran sus problemas ambientales e incluso sus procesos productivos a los países menos desarrollados; segundo, que los países más desarrollados impongan sanciones económicas contra los del tercer mundo para que adopten sus propios estándares de protección ambiental sin considerar los esfuerzos realizados con los recursos económicos, tecnológicos y humanos disponibles, y tercero, que los grupos ambientalistas logren despertar en los países menos desarrollados el interés de sectores importantes de la población sobre los problemas ambientales para que los gobiernos de estos países realicen acciones tendientes a solucionar a los problemas.

Estas opciones no son, por supuesto, excluyentes; la negociación internacional puede estar influenciada por una combinación de todas ellas. En todo caso, cabe preguntarse si el tema de la protección ambiental puede permanecer como un lujo asociado a un cierto nivel de desarrollo o si se puede introducir sin pasar por las etapas que algunos modelos de crecimiento económico sugieren. En cualquier caso, la adopción de políticas ambientales tienen implicaciones para los países menos desarrollados por lo menos en tres dimensiones: las inversiones productivas, como originarias del crecimiento económico; la transferencia de tecnología y recursos económicos para la implementación de políticas ambientalistas, y, finalmente, la democratización de los procesos de toma de decisión sobre éste y otros problemas sociales.

En materia de inversiones, la política industrial de los países del tercer mundo generalmente ha seguido el modelo occidental de gran industria, que implica el consumo de grandes cantidades de energía. Durante

décadas, las agencias financieras internacionales apoyaron estos procesos de industrialización mediante créditos para la construcción de grandes presas, así como para facilitar el abasto de energéticos orgánicos ya sea mediante la explotación de los recursos existentes en el país o a través de la importación de los mismos.

En la última década el resultado que dichas políticas han tenido en el medio ambiente de esos países ha sido seriamente cuestionado y se han empezado a introducir algunos cambios. Sin embargo, no se deja de insistir en el uso de indicadores de crecimiento económico como sinónimos de nivel de desarrollo. Con dificultades se ha logrado introducir el uso de estudios de impacto ambiental en los proyectos de desarrollo, pero todavía no se cuenta con el instrumental analítico para establecer el verdadero valor de los recursos naturales que se destruyen con cada programa de crecimiento industrial. Algunos países han empezado a experimentar con el uso de tecnologías tradicionales, pero sólo en pequeña escala.

Otro problema importante es el uso de tecnologías eficientes en el consumo de energía y menos generadoras de contaminantes en la mayoría de los procesos productivos y en los sistemas de comunicación y de transportes. Para los países menos desarrollados la adquisición de tecnología constituye un gasto de divisas bastante oneroso que puede, incluso, competir con el uso de los recursos para los otros fines. La reconversión industrial de los países no es sólo una decisión económica, constituye de hecho una medida política en la que se deben sopesar las necesidades inmediatas de la población y los compromisos internacionales en materia de medio ambiente, deuda externa y comercio.

En este sentido, se puede también decir que la Conferencia Internacional de Río de Janeiro enfrentó indirectamente el reto que representan los diferentes niveles de vida democrática a nivel interno en cada uno de los países que participaron en dicha conferencia. Una buena proporción de los análisis que suponen que las Naciones Unidas están en condiciones de sacar adelante una política internacional efectiva sobre medio ambiente, tienden a perder de vista que en última instancia la participación de cada gobierno en este tipo de esfuerzos está determinada

en gran medida por su posición en el sistema mundial, pero también por los niveles de activismo de su sociedad civil con relación al medio ambiente. En la medida que las decisiones importantes sobre este asunto estén sujetas al escrutinio público, los gobiernos estarán más obligados a comprometerse en la adopción de soluciones para los problemas ambientales tanto a nivel doméstico como internacional. □

#### BIBLIOGRAFÍA

Ryan, John C., "Conserving Biological Diversity", Lester Brown et. al., *State of the World, 1992*, New York, W.W. Norton & Company, 1992.

# Diez

SEMANARIO DE POLÍTICA Y CULTURA

Otro punto de vista en la noticia

**Periodismo alternativo**

**Publicidad y suscripciones:**

Libertad No. 978, Sector Juárez

Teléfono y fax: 658-20-55

Guadalajara, Jal. México

C.P. 44100

